

## NI ELECCIONES NI ELEGIDOS

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en El Salvador la votación para elegir diputados a la Asamblea Legislativa y alcaldes para los diversos municipios de la República. De hecho, a la votación sólo acudió el Partido de Conciliación Nacional (PCN), partido en el poder, mientras que la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición formada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN), hizo público su retiro de los comicios desde finales de febrero. Prescindiendo de sutilezas legales, al quedar realmente en la palestra los candidatos de un solo partido, desaparecía la posibilidad de la alternativa electoral; y, al ser estos candidatos los representantes del partido en el poder, el proceso electivo quedaba reducido a un simple referendo de carácter más o menos popular. En nuestro caso, más bien menos popular, por doloroso que resulte reconocerlo.

A la espera de posteriores análisis y con la provisionalidad de un comentario sobre la marcha, cuando aún no se conoce a cabalidad el desenlace de esta coyuntura, nueva en el país, esbozamos algunas notas de reflexión, que sirvan al menos para romper el ominoso silencio editorial (¿incapacidad técnica, ¿irresponsabilidad social?) de que han hecho gala los principales medios de comunicación e información masiva.

Ante todo, conviene tomar conciencia del trasfondo sobre el que se plantearon los pasados comicios en El Salvador. De todos es reconocido que la situación económico-social es de extrema gravedad, que los problemas que se arrastran lustro tras lustro no sólo no van hallando una paulatina solución, sino que se van agravando progresivamente, y que, lo que es más serio, ni siquiera se vislumbra una solución adecuada para esos problemas que sea realista. Como se ha dicho no pocas veces, El Salvador no es viable por sí solo, y únicamente en el contexto de una auténtica integración centroamericana podría aspirarse a soluciones integrales. Este abrumador panorama no es totalmente culpa de los últimos gobiernos. Más bien se podría decir que los últimos gobiernos son "culpa" de la realidad del

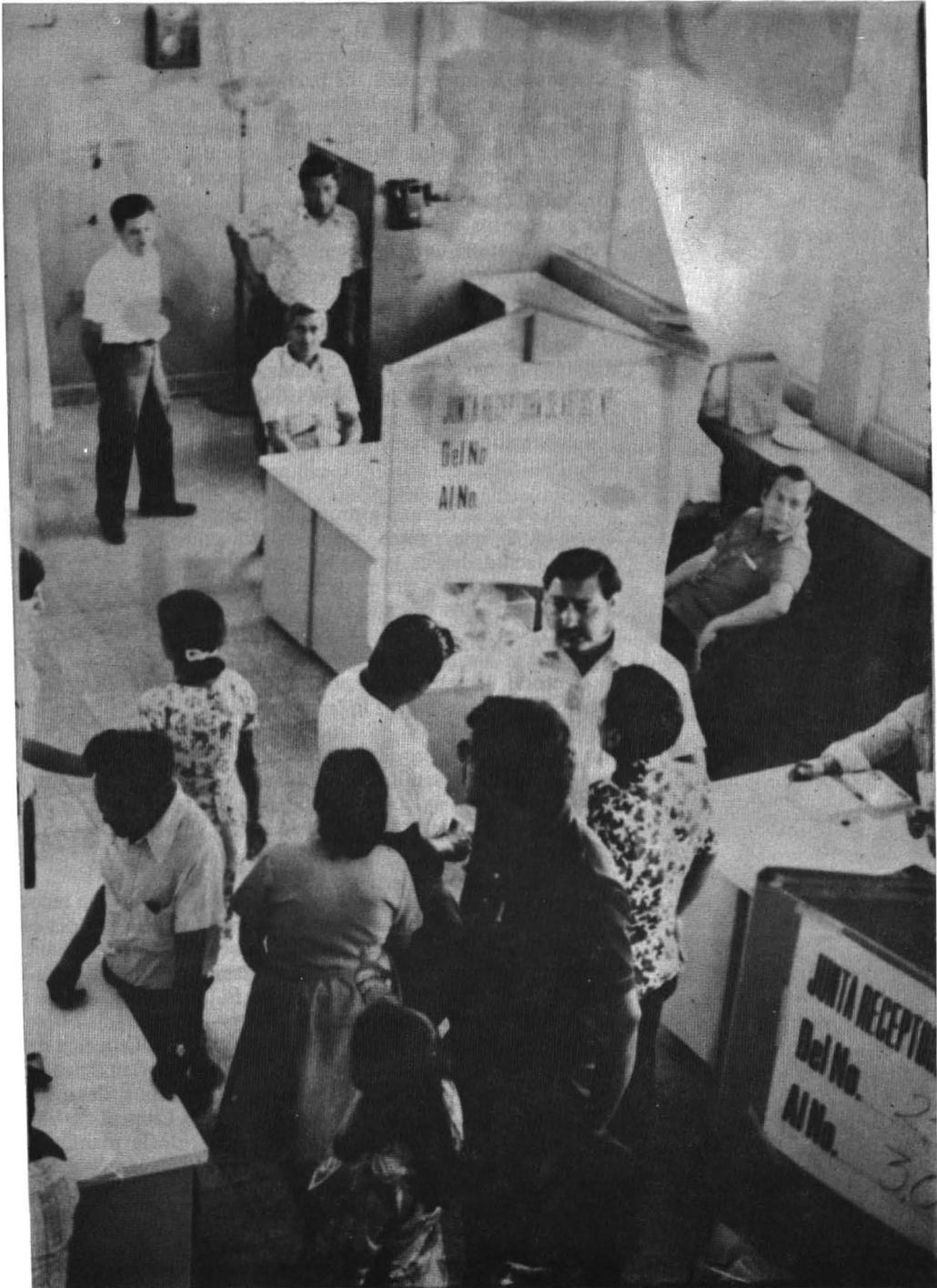
país, sin que ésto implique ningún tipo de juicio sobre ninguna persona en particular. En todo caso, frente a esta situación nacional de auténtica emergencia, los esfuerzos de los gobiernos, pocos o muchos, han resultado inadecuados y, en el mejor de los casos, insuficientes. Por lo demás, cuantas veces se ha querido, con encomiable intención, transformar alguno de los aspectos básicos en la estructura injusta del país, la oligarquía económica ha reaccionado con una violencia inusitada. Así, valiéndose de todo tipo de presiones, se han bloqueado no pocos intentos de reformas, por más racionales y moderadas que aparecieran a observadores imparciales. El resultado es que los problemas del país se han ido agravando y, al mal objetivo, se ha ido uniendo la conciencia desesperada de las mayorías, que se sienten condenadas irremisiblemente a una vida en la miseria.

Es normal que la conciencia popular atribuya la causa de todos sus males a la instancia visible de poder, es decir, a quienes aparecen públicamente como representantes y conductores de esta sociedad injusta. En política, se suele considerar normal que todo partido en el gobierno se debilita y se fortalezca en la oposición, al menos en lo concerniente a popularidad. En este sentido, el PCN, como partido en el poder, tenía (y sigue teniendo) que contar con una no pequeña dosis de impopularidad. Además, la memoria del pueblo guardaba fresco el recuerdo de una serie de hechos represivos, sucedidos tanto en el campo como en la ciudad, cuya responsabilidad pública había tenido que ser asumida por el Gobierno y que habían deteriorado aún más su ya precaria imagen popular.

Todo ello llevaba a una conclusión lógica: en unas elecciones libres, podía esperarse una victoria de la oposición. Pero, junto a esta conciencia, estaba también el convencimiento popular de que las fuerzas en el poder real (y no sólo las instancias visibles) no estarían dispuestas en ningún caso a dejar ese poder a la oposición. Ello generaba un ambiente de escepticismo hacia el proceso electoral, considerado como un ritual formalista más que como un mecanismo de participación democrática.

De hecho, el partido en el poder (o, quizá, el poder ejercido a través de un partido, en este caso el PCN) ha tratado por muchos medios de anticiparse a una posible derrota electoral. Por un lado, apoyado en las inmensas ventajas de su posición y en los más diversos recursos estatales, ha ido fortaleciendo sus estructuras y mecanismos a todos los niveles, creando un aparato de no poca eficiencia para los fines electorales. Por otro lado, se ha debilitado por todos los medios el posible activismo político electoral de la oposición. Ante todo, las reformas introducidas a la ley electoral aumentaron considerablemente los obstáculos que tendría que superar cualquier agrupación que no fuera la oficial para entrar en el juego de las elecciones. En segundo lugar, se mantuvo en sus puestos en el Consejo Central de Elecciones a quienes no ofrecían la menor garantía de imparcialidad. Así, con un CCE adicto al poder y servil a sus designios, excelente manipulador de los recovecos legalísticos (que no propiciador de la intención constitucional), se establecía el debate electoral ante un tribunal que ni el pueblo ni los partidos opositores podían considerar ecuánime. Finalmente, la obstaculización y aun desintegración sistemática de las organizaciones sindicales y populares, así como el hostigamiento y aun amedrentamiento a sus líderes, desarticulaba las posibles bases de la acción electoral opositora.

En este contexto, mediato e inmediato, se entró en la campaña electoral. En la palestra, tan sólo dos agrupaciones: el PCN y la UNO. Fuera quedaban minipartidos, como el FUDI o el PPS, sin base humana ni estructura ideológica, que en otras circunstancias podrían servir como va-





riables, aunque no como alternativas reales al partido en el poder. Desde el principio, en un ambiente de frialdad y escepticismo popular, las contendientes hicieron gala de una increíble violencia ideológica, al plantear falsamente la alternativa. El partido oficial acusaba a la oposición de comunista; la oposición culpaba al partido en el poder de fascista. Y ni uno ni otro parecían dispuestos a tomar conciencia del absurdo político que supondría una pugna entre comunismo y fascismo en la palestra de unas votaciones democráticas. La verdad es que ni la UNO constituye una agrupación comunista (aunque haya un sector minoritario adepto a esa postura dentro de la coalición), ni el PCN constituye un partido fascista (aunque algunos de sus miembros manifiesten tendencias propias de esa corriente política). Así, desde el principio la campaña aparecía como un enfrentamiento de mutuas invectivas, y en modo alguno como un proceso encaminado a iluminar las opciones políticas entre las que el pueblo podía escoger. Fuera de algunos breves atisbos de unos y otros, en conjunto la campaña se ha caracterizado por la ausencia de análisis serios y objetivos sobre los problemas que aquejan al país y de las soluciones propuestas. Si por la campaña hubiera que juzgar, se diría que los partidos contendientes carecían de programas positivos que proponer al pueblo.

Junto a la campaña propagandística, el quehacer de los mecanismos legales. A lo que parece, mientras al partido oficial se le brindaron todo tipo de facilidades, la Unión Nacional Opositora encontraba una sistemática obstaculización a sus esfuerzos por incorporarse a la contienda política desde los diversos organismos oficiales. Según una denuncia responsable publicada en la prensa local, y nunca refutada, los funcionarios oficiales, encargados de suministrar los documentos necesarios para entrar en el juego electoral, hicieron lo imposible por bloquear la inscripción de los candidatos de la oposición a lo largo y ancho de la República. Y, ciertamente, lo consiguieron. Salvando dificultades increíbles, más propias de la literatura picaresca clásica que de la realidad del siglo XX, la oposición logró apenas presentar planillas para un tercio de las plazas en disputa. Este porcentaje no podía ser considerado como muy satisfactorio por la oposición, y menos por el pueblo, a quien de hecho se privaba de alternativa en dos tercios de los casos.

Este bloqueamiento sistemático, llevó a la UNO a reconsiderar su estrategia y a replantearse la conveniencia de ir a elecciones en esas circunstancias. Dos hechos precipitaron su decisión de abandonar la contienda electoral: por un lado, una "interpretación auténtica" a la Ley del ramo Municipal, según la cual el Gobernador Político (funcionario designado por el Poder Ejecutivo y no por elección popular) tendría competencia para intervenir y modificar el presupuesto municipal. Con esta disposición, que parecía dedicada especialmente a la Alcaldía de San Salvador (tradicionalmente en manos del Partido Demócrata Cristiano), desaparecería la autonomía municipal. Por otro lado, el Consejo Central de Elecciones declaraba inadmisibles las solicitudes de inscripción de la planilla para diputados por San Salvador de la UNO, lo que impedía a la oposición entrar a elecciones donde su victoria se preveía más clara. En estas circunstancias, y razonando que la Constitución había quedado rota, la oposición juzgó que perdía todo su sentido el proceso electoral y que más valía retirarse de él.

Hasta aquí, los hechos. De aquí en adelante, las posibles consecuencias. Y la primera y más obvia es que el pueblo salvadoreño se quedó sin alternativa electoral posible, al menos en estas últimas "elecciones". Posiblemente, la alternativa hubiera sido meramente formal en un buen número de casos, supuesto que a la oposición no le iba a ser posible el acceso



al poder (por ejemplo, el control mayoritario de la Asamblea Legislativa). De todos modos, al desaparecer la alternativa, desapareció uno de los pocos vestigios de democracia formal que aún quedan en nuestro país.

Otra consecuencia inmediata es la absorción, por parte del Partido oficial, de la Alcaldía de San Salvador. Es evidente que el Gobierno Central ha ambicionado largamente el control de este Municipio que, en El Salvador, representa un no despreciable centro de poder; pero también es evidente que el voto popular le ha sido repetidas veces adverso. Ahora, el PCN se apodera de esta alcaldía con el voto de una minoría de capitalinos. Friamente considerado, es muy posible que la capital se beneficie a nivel material con esta absorción: el Gobierno ya no se dedicará a bloquear las diversas iniciativas municipales o a obstaculizar sus realizaciones. Sin embargo, a nivel político, el monopolio de todas las instancias gubernamentales puede ser fatal: la ausencia de contraste o discrepancia puede conducir a la arbitrariedad, al abuso y al poder totalitario, y esto es peligroso se lo mire por donde se lo mire.

Finalmente, una última consecuencia inmediata -de efectos imprevisibles- es que la oposición legal va a quedar marginada, por lo menos en los próximos años, respecto a cualquier mecanismo del aparato del Estado. Tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista del control operatorio, esta marginación puede acarrear funestas consecuencias.

Las consecuencias, ya no inmediatas, sino más de fondo, son todavía más serias. Aquí las dejamos meramente insinuadas, a la espera de una reflexión más ponderada y que cuente con más elementos de juicio.

Lo primero que parece claro es que la realidad, nuestra realidad dependiente, injusta y subdesarrollada no es capaz de soportar un esquema de democracia parlamentaria y pluripartidista. Este esquema requiere una base social, económica y cultural muy distinta a la nuestra. Nuestras estructuras reales no son capaces ya ni de mantener el formalismo de la fachada liberal. En esto, El Salvador no es una excepción a lo que, para bien o para mal, aparece cada vez más claro en los diversos países latinoamericanos. El pasado proceso electoral ha explicitado pública e indudablemente la crisis del sistema, crisis que se viene gestando ya desde hace no poco tiempo. El problema es tan serio que, para no pecar de superficialidad, más vale dejarlo simplemente apuntado, a la espera de ulteriores y concienzudos análisis.

Otro problema, muy ligado con el anterior, es el cauce que la instancia oficial vaya a ofrecer a los discrepantes y opositores políticos. Hasta ahora, el juego de la política partidista ofrecía un mínimo de conductos legales, a través de los cuales se podía ejercer legalmente la disensión, la crítica, el enfrentamiento político. Los partidos han representado una forma parcial y controlada de participación en el poder, así como un desagüe de rivalidades y frustraciones. Sin embargo, el resquebrajamiento real del juego partidista, el bloqueo (legal o factual) al desempeño de la acción de los partidos, va cerrando cada vez más la viabilidad a esta forma de oposición política. Una posible alternativa es la instauración del enfrentamiento en el interior de un mismo partido, es decir, el reconocimiento y canalización de tendencias diversas en el contexto de una misma organización política (PCN u otra). Sin embargo, esta posibilidad a muchos puede resultarles insatisfactoria. Se corre el peligro de que, al cerrar las puertas a la oposición legalmente constituida, se esté forzando a muchos a buscar otros cauces a su inquietud cívica. En otras palabras, si quienes, por la razón que sea, discrepan del partido en el poder, no encuentran cau-



ces políticos legales para influir en la marcha del país, es de temer que busquen cauces ilegales. Ilegal no quiere decir por lo mismo violento. Sin embargo, no parece justo ni racional que la ley sea tan estrecha que no permita en su interior la crítica y la oposición. Nunca ha sido bueno amordazar a un pueblo ni maniar su voluntad. Por ello, la paulatina desaparición del juego partidista debe llevar a una búsqueda seria y honesta de nuevas y reales formas de participación popular. La democracia liberal no es la única forma de democracia, ni los partidos políticos son la única forma de actuación política, aunque una y otros puedan tener muchas ventajas. Pero dos puntos es importante retener en cualquier supuesto: primero, que El Salvador hoy por hoy debe optar por la democracia; y segundo, que no existe verdadera democracia mientras no existan cauces de auténtica participación popular en el gobierno.

Todo esto nos lleva a preguntarnos por el futuro de nuestro país. Si el sistema hasta hoy vigente está en crisis, posiblemente esto no se deba tanto a los gobiernos tenidos cuanto a las estructuras socioeconómicas que los sustentan. Sin embargo, la solución de esta crisis va a requerir medidas no sólo de tipo económico, sino también político. Nuestra situación de cotidiana emergencia nacional reclama un gobierno enérgico, plenamente identificado con los problemas del pueblo oprimido; un gobierno con objetivos claros y una inquebrantable voluntad política de realizarlos; un gobierno que abra nuevos cauces de participación popular, a fin de frenar los intereses egoístas y desenfrenados de una oligarquía rancia y minoritaria; un gobierno, en fin, que se aboque sin dilaciones a un cambio radical de aquellas estructuras injustas que inveteradamente oprimen y reprimen al pueblo salvadoreño. Quién podría constituir ese gobierno es algo que no se puede resolver a la ligera y menos presuponer. Desde luego, no lo podría constituir quien no hubiere demostrado con hechos una clara voluntad de identificación con las causas populares y capacidad real para llevarlas adelante. Si esto se lograra, entonces sí, la crisis de la democracia liberal podría constituir una verdadera liberación del pueblo para la democracia real. Podría ser, en definitiva, la oportunidad para que el pueblo salvadoreño empezara a escribir las primeras páginas de su propia historia.

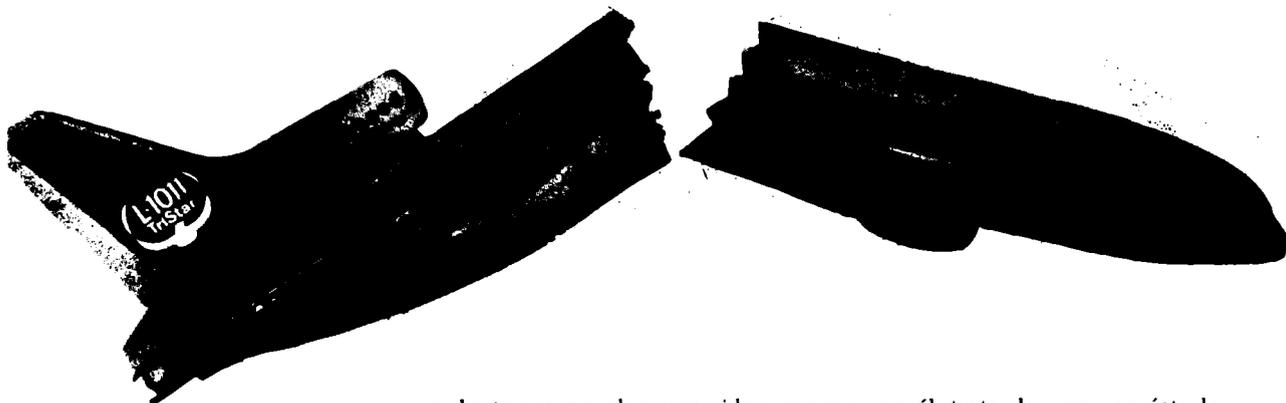
# LOS SOBORNOS DE LA LOCKHEED O LA SOBERANÍA DEL PRODUCTOR

Los recientes escándalos que están aflorando al conocimiento público en los Estados Unidos y, particularmente, el de una gran empresa productora de aviones, la Lockheed, ilustra perfectamente cómo funciona el celebrado "mercado libre" en una sociedad capitalista avanzada.

Los apologistas del mercado y, entre ellos, los libros de economía que se estudian en nuestras universidades, nos describen el funcionamiento del mercado en una sociedad capitalista como un encuentro armonioso y equilibrado de la oferta y la demanda, donde, en definitiva, el **consumidor soberano** decide, por su voto en el mercado, las mercancías que hay que producir, sus cantidades y sus precios. En esta visión glorificada del mercado, los productores siguen los dictados de la demanda, detrás de la cual están los deseos y decisiones de ciudadanos libres.

Esta descripción teórica del funcionamiento del mercado sirve para justificar la actual y real organización de los mercados capitalistas, con la pretensión de que éstos funcionan en realidad, más o menos, como el modelo ideal. Se argumenta que sólo en el tipo de organización económica basada en un mercado como el idealmente descrito se puede garantizar la independencia de las decisiones económicas de los individuos y, así, su libertad integral y la democracia. Aun suponiendo sin discusión que esta afirmación sea correcta, todavía, para demostrar que la organización económica actual es la única salvaguardia de la libertad individual y de la democracia, habría que dar un paso intermedio e importantísimo: probar que la economía capitalista moderna funciona según las líneas generales de un modelo de mercado libre de competencia perfecta.

Sucesos como el que comentamos nos hacen ver que la realidad no es simplemente una defectuosa aproximación al modelo ideal, lo cual sería tolerable, sino que es completa y radicalmente distinta. Lo normal no es que el productor se adapte a la demanda, sino que trate de adaptar la demanda a lo que produce. La soberanía, en una palabra, la tiene el



productor y no el consumidor, aunque aquél trate de crear en éste la ilusión de lo contrario. Esto vale sobre todo para las más grandes empresas, que son las que marcan el tono en los mercados capitalistas, y las que fomentan la ideología del mercado libre como una defensa de lo contrario.

¿Qué son, si no, desde el punto de vista económico, los sobornos de la Lockheed? Las personas o instancias que juzgan los hechos desde un punto de vista ético, valoran estos pagos (pay-offs, en el idioma original) como sobornos, dándoles una clara connotación condenatoria y repudiatoria. Pero, ¿qué son desde el punto de vista de las empresas? Son costos de promoción o de ventas, algo que está fuera de valoraciones éticas, en cuanto son exigidos por el funcionamiento del mercado capitalista real y actual.

La demanda del Tri-Star, el Jumbo de la Lockheed, por ejemplo, no es un dato fijo, determinado aparte e independientemente del productor, un dato al cual el productor simplemente trataría de adaptarse. Las cosas no funcionan así en nuestro mundo. La Lockheed decide fabricar el Tri-Star; en la decisión global, se determina un número mínimo de unidades, que hay que producir para que la operación deje un beneficio. Por tanto, cuando menos hay que vender ese número de aviones. ¿Y la demanda? Si ya existe, magnífico; pero si falta, hay que crearla a como dé lugar: promoción de ventas, publicidad, relaciones públicas. . . y, por qué no, pagos extraordinarios a dignatarios y políticos, que algunos llaman sobornos. Estos llamados sobornos son costos de venta perfectamente de acuerdo con las verdaderas relaciones entre oferta y demanda de las grandes empresas. ¿Qué gran empresa no incurre en estos costos, que los profanos llaman despectivamente sobornos?

Algunos de estos costos de venta salen a superficie de vez en cuando; la mayoría, no. Quedan como cosa confidencial o estrictamente secreta a los niveles más altos del poder. Lo cual muestra que los interlocutores de las grandes empresas capitalistas son los centros del máximo poder político, capitalista y socialista, pero en ningún caso el público, el consumidor, atomizado, independiente y sin ningún poder suficientemente extenso y profundo como para poder atribuirle soberanía alguna en el mercado capitalista. La única soberanía la tienen las grandes empresas productoras y defender lo contrario es engañar maliciosa e intencionadamente, es opiar al pueblo para que siga arrodillándose ante el ídolo capitalista.